

## **Todos y todas somos esenciales**

Con este lema pretendemos celebrar este año el día del refugiado ampliando el horizonte habitual de la efeméride.

La perversidad en la que nos movemos resulta aplastante. Los ejemplos son diarios. Desde mediados de abril a finales de mayo, Grecia expulsó a más de 700 solicitantes de asilo, a partir del 1 de junio, 11.000 han sido desalojados de sus emplazamientos, aplicando mediadas de violencia que avergüenzan al menos timorato, contando con el beneplácito y el aplauso de una Europa que perdió hace tiempo su dignidad democrática.

Se devuelven pateras que, tras superar los riesgos de una travesía que certifican los innumerables muertos que se ha cobrado, y una vez alcanzadas aguas griegas, son devueltas al mar, abandonadas al albur de la suerte, sometidas al sufrimiento que supone el tránsito, al riesgo de hundimiento de la embarcación y al peligro de la persecución y muerte de la que huían. En este modelo de iniquidad en que se ha convertido Grecia como mascarón de proa de la Europa de la vergüenza, se devuelven a Turquía a cientos de personas de todas las edades que se encontraban en campos de refugiados griegos.

Pero la impudicia no sólo se ceba en Grecia. El apoyo europeo aseguró el contagio y, a primeros de mayo, España intentó una deportación colectiva de tunecinos desde el CETI de Melilla, saltándose a la torera la prohibición de deportaciones en masa. Unos días más tarde, el 18 de mayo, el defensor del pueblo denunció que España estaba haciendo lo mismo con Marruecos desde Chafarinas. Y puestos a saltarse los más elementales límites del respeto, la policía crota marcaba con una cruz de spray roja la cabeza de los solicitantes de asilo. Da la sensación de que la cámara de los horrores se abre una y otra vez con intención de no cerrarse nunca y su catálogo de brutalidades tan sólo se siente limitado por nuestra hipocresía, esa que parece obligarnos a guardar alguna que otra apariencia.

Hemos construido una sociedad basada en el individualismo, en la preocupación exclusiva por resolver nuestros problemas particulares. Parecemos preocupados tan sólo por dar salida a nuestras ambiciones de consumo, obviando otras, como la justicia social, más dignas de nuestra condición humana. Es decisión propia continuar por este desolador camino que lleva a que nuestras miserias personales acaben sobrepasando nuestras conciencias, agazapadas en el yo, mi, me, conmigo.

Parecemos incapaces de mirar fuera de nuestro propio ombligo, de entender que nuestros problemas y necesidades son colectivos que el sentido de la justicia tiene que estar por encima del de garantizar el bienestar particular y, en definitiva, que todas y todos somos esenciales. Parecemos olvidar que, alrededor de 70,8 millones de personas en todo el mundo se han visto obligadas a huir de sus hogares. De ellas, en la actualidad, hay más de 45 millones de refugiadas (la población de España), desplazadas y/o apátridas en el mundo. Entre ellas, más de la mitad, (25,9 millones) son refugiadas. Una cifra similar a la de las personas que, entre esos 45 millones, son menores de 18 años.

El objetivo de la efeméride, cada año, es rescatar del olvido la dramática situación que viven estas decenas de millones de personas desarraigadas: refugiados, apátridas, desplazados internos y solicitantes de asilo. Rescatar del ostracismo a cada una de esas 24 personas que, cada minuto de cada día, lo dejan todo para huir de la guerra, la persecución o el terror. Seres humanos que, debido a fundados temores de ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, ven peligrar su

vida si regresan a su país de origen. Ayer fuimos nosotros, los europeos, quienes huíamos y fueron ellas y ellos quienes nos acogieron y compartieron con nosotros trabajo y anhelos. Ahora son ellos quienes nos necesitan, mañana podremos ser nosotros, de nuevo, quienes necesitemos asilo.

Hemos globalizado el movimiento de mercancías, pero no el de personas y, sin embargo, esa interdependencia, que parece tener tan clara el sector económico, resulta invisible en el terreno social. Todos y todas somos esenciales. Los problemas son globales. La guerra es sólo uno de los factores que impulsan la emigración. La pobreza es otro fundamental que no queremos entender en su verdadera media y que algunos, desde el delirio de la xenofobia, pretenden explicar como producto de la mala gestión política o de la haraganería generalizada de su población. Pero, dentro de estas causas de movilidad forzada, los problemas medioambientales están pasando a primera línea y eso es lo que nos ha impulsado a abrir el abanico del asilo al resto de los inmigrantes.

Así pues, en este día, nuestra primera reivindicación como Plataforma es clara: Mismos derechos y mismas obligaciones para todas las personas. No podemos sembrar el campo de esclavitud encubierta. Cuando nos sentemos a la mesa, es hora de preguntarnos quien recolecta la vid, la fruta o los espárragos. Quién se mete bajo los plásticos para recoger las fresas o para garantizarnos el lujo de comer determinadas frutas y verduras fuera de temporada. Por eso exigimos con claridad y contundencia que cese la esclavitud encubierta y, para ello, resulta imprescindible una regularización inmediata de todas las personas migrantes que se encuentran en España trabajando en situación irregular.

Nos unimos así a la solicitud de regularización que, en nombre de más de 200 organizaciones y 40.000 personas hacía, a la Cámara Baja, el 1 de junio, la coordinadora de los servicios jurídicos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Paloma Favieres. Tal como se argumentaba allí, es imprescindible flexibilizar los requisitos para la concesión de autorizaciones de residencia y trabajo. En un momento en el que muchos de esos migrantes han perdido el empleo sin derecho a un ERTE o a un permiso retribuido. Un momento en el que, mientras nosotros guardábamos la cuarentena, una parte del colectivo migrante ha ocupado trabajos clave en el sector de los cuidados, la logística o el transporte, sin olvidar el agrario, fundamental para garantizar nuestra subsistencia.

El principio básico de “mismas obligaciones, mismos derechos” hubiera evitado sucesos como los de Torre Pacheco que se evidenciarían en toda España si las inspecciones de trabajo hicieran el suyo con el suficiente celo profesional. En esta misma dirección, resultan loables, pero absolutamente insuficientes, los dos años de permiso de trabajo que el Gobierno ha concedido a los jóvenes migrantes extutelados, cuando el campo demandó cien mil personas que permitieran asegurar las recolecciones en tiempos de coronavirus. Un llamamiento, al que, sin embargo, no acudieron todos aquellos votantes que en tiempos de elecciones braman su expulsión porque nos quitan el trabajo a los nacionales.

Para Portugal e Italia, el pacto europeo de 2008 no les ha impedido responder al COVID-19 con una regularización parcial de inmigrantes. España, que ya regularizó 450.000 durante el mandato de Aznar (1995) y más de medio millón durante el gobierno de Zapatero (2005), se escuda en dicho acuerdo para no unirse a esa iniciativa que desde aquí reivindicamos como imprescindible, más allá del utilitarismo, desde una perspectiva de justicia social.

También nos sumamos a la propuesta que, al día siguiente, presentara CEAR, junto a profesionales de la abogacía y otras ONGs que defienden específicamente los derechos de la

infancia y que no es otra que la reforma del RD 557/2011. Se trata de modificar sus artículos 148, 190, 196, 197, 198 y 211 relativos a la identificación, documentación y tramitación o renovación de las autorizaciones de residencia y trabajo de los menores no acompañados que llegan a territorio español, y quedan bajo nuestra tutela, para favorecer su inserción efectiva en la sociedad española.

Desde esos centros de detención encubierta que son los CIES, cuyo cierre hemos reivindicado tantas veces y seguiremos haciéndolo, no se garantiza en absoluto esa necesidad. No sólo eso, la pandemia ha demostrado que su clausura es perfectamente posible, además de deseable, al ser capaz de cerrarlos durante dos semanas. Evidenciando de paso, una vez más, lo inhumano de sus instalaciones.

Queremos hacer una última referencia a los rohingyas convertidos en apátridas por su propio país, Myanmar. La pandemia ha agravado, más si cabe su situación. Con excusa del coronavirus, los cambios de las políticas migratorias de los países de la zona, incluida Malasia, han terminado por convertirlos en los olvidados de entre los excluidos. Como consecuencia, durante estos últimos meses, varios barcos de migrantes han sido abandonados a su suerte en el golfo de Bengala sin recibir apoyo alguno.

El coronavirus ha impedido el desarrollo de los actos programados para este día y que pretendían ser un llamamiento, no sólo a las comprometidas, sino a todas a aquellas personas que defendemos la solidaridad como principio y lo hacemos porque está en nuestro ser, porque nos caracteriza como seres humanos. A todas y todos aquellos que nos posicionamos contra el racismo, la xenofobia y la islamofobia porque el rechazo a la injusticia forma parte de nuestra integridad moral y ética. A quienes reivindicamos el auxilio al débil y al indefenso porque esa protección al desamparo forma parte de nuestra esencia y no estamos dispuestos a que nos la robe la mercantilización de ideas, sentimientos y emociones a la que nos somete el modelo de vida en el que nos movemos. Era y es una invitación a defender los derechos humanos como una plasmación de ese sistema de valores al que no estamos dispuestos a renunciar. Las pegatinas en las mascarillas son también una invitación a hacer público y notorio nuestro posicionamiento de que todos y todas somos esenciales e iguales y que por eso tenemos las mismas obligaciones y nos amparan los mismos derechos.

¡Ningún ser humano es ilegal! ¡Regularización, ya!